

Juzgado Cuarenta y Cuatro (44) Civil Municipal de Bogotá
Carrera 10 No. 14-33 piso 19 Teléfono 2847234
Edificio Hernando Morales Molina
Email: cmpl44bt@cendoj.ramajudicial.gov.co

Bogotá D.C, diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintiuno (2021)

RADICACIÓN:	No.110014003044 2021082000
ACCIONANTE:	El niño JOSÉ AGUSTÍN RODRÍGUEZ, R.C.No.1.013.148.196 a través de su madre LADY ANDREA BELTRÁN CÁRDENAS
ACCIONADA:	LICEO BOGOTÁ, Nit.900.326.953-9
PROVIDENCIA:	SENTENCIA

Surtido el trámite de instancia, procede el Juzgado a proferir la sentencia que en derecho corresponde, previos los siguientes:

I. ANTECEDENTES

A) FUNDAMENTOS FÁCTICOS

El niño JOSÉ AGUSTÍN RODRÍGUEZ, R.C.No.1.013.148.196 a través de su madre LADY ANDREA BELTRÁN CÁRDENAS, contra el LICEO BOGOTÁ, Nit.900.326.953-9, interpuso acción de tutela por la presunta vulneración al derecho de PETICIÓN y OTROS, a cuyo propósito refiere como hechos relevantes que: “PRIMERO. Mi hijo JOSÉ AGUSTIN RODRÍGUEZ BELTRÁN de 6 años de edad estudió en el LICEO BOGOTÁ desde febrero 2020 hasta agosto 2021, fecha en la cual lo retiré por los motivos que se exponen: 1.1. Desde el inicio de la cuarentena y en medio de las clases mediadas por recursos tecnológicos realicé varias solicitudes enfocadas a estudiar la posibilidad de reducción de la jornada académica para mi hijo José Agustín Rodríguez, ya que estar 7:30 horas sentado en clase, en jornada de 7:00 a 14:30 me resultaba excesiva, esta solicitud la realicé desde el 2 de febrero de 2021, pero nunca recibí respuesta a la misma (Prueba correo 1 y 2). 1.2. Posteriormente, empecé a notar tratos groseros, agresivos e inadecuados contra mi hijo, porque no permanecía en clase las 8 horas, o se distraía o porque la cámara del portátil se apagaba y puse de manifiesto esa situación, indicando que el programa de la cámara del portátil solía apagarse, pero no era por responsabilidad del niño, así mismo, indiqué que al ser tan larga la jornada, el niño se distraía (Prueba correo 3). 1.3. Especialmente, presenté queja frente a la docente Gina Alfonso que le dijo que era un “deshonesto, un grosero”, que el hecho de irse a comer durante la clase Página 2 de 11 era una ofensa grande contra ella y que no iba a soportarla (Grabación de clase que tiene el colegio y Correo 4). 1.4. A partir del momento de la queja empecé a notar en aumento comportamientos hostiles contra mi hijo, al punto en que él, ya no quería ir a las clases en alternancia ni virtualmente y dejó totalmente de participar en clases. (Se anexa certificado de notas 2020 y 2021). 1.5. A partir de ese momento, solicité directamente al Coordinador académico, que se permitiera la desvinculación académica de mi hijo, del plantel, pero la solicitud fue ignorada. 1.6. De otra parte, se evidencia también a partir de, aproximadamente mitad de año que se empiezan a multiplicar las quejas de las docentes y las anotaciones en el observador, al punto en que se ponían dos o tres quejas en el observador diariamente, así mismo se suman las llamadas a mi teléfono, indicándome que mi hijo era agresivo, que no hacía nada en clase, que se sentían intimidados por su comportamiento (Prueba copia del observador). 1.7. Debido a lo anterior, el Colegio me cita y se compromete a intentar nuevas formas de aumentar el interés del niño en las clases y me remite a psicología, yo actuando de conformidad: aumento canales de comunicación con el niño y empiezo el proceso de psicología con la entidad a la que me remitió el colegio, el día 9 de agosto de 2021 (Prueba citas psicología). 1.8. Así mismo, se acuerda que se buscará por parte del Colegio dar clases de refuerzo en lectoescritura – se aclara que tendrá costo adicional, a lo que yo accedo – y que, para ello, envíe un cuaderno para realización de ejercicios de escritura, pero a la fecha nunca se fijaron las clases de refuerzo ni se usó siquiera una hoja del cuaderno de repaso. 1.9. A pesar de los compromisos adquiridos por el Colegio, el día 12 de agosto me llega mensaje de correo electrónico por parte de la Directora de Grupo de mi hijo (se aclara que el liceo puede proveer esta prueba ya que desde el día del retiro del colegio me bloquean el acceso al mismo), donde me citan a firmar matrícula condicional por las mismas acciones que habían llevado a los compromisos anteriores, situación que me sorprende, porque no está conforme lo acordado poco tiempo antes (Prueba Correo), es de indicar que claramente se me dijo que se trataba de matrícula condicional, por parte del coordinador John Pabón, a pesar de que luego la Directora

adujo que era solo un compromiso académico. 1.10. Nuevamente reitero mi solicitud de terminación del contrato con el Colegio ya que se establece que no es una educación óptima para mi hijo, y porque insisto en que ya he solicitado que el niño sufre de un problema motivacional fuerte debido al maltrato por parte de varias docentes, pero nuevamente, se me ignora. 1.11. El día de la firma de la Matrícula Condicional (el Coordinador Jhon Pabón me indica que es una matrícula condicional), se me insiste en que mi hijo de 6 años es agresivo, que atemoriza a las docentes, que nunca quiere escribir ni participar en clase, y me indican que están próximos a desescolarizar al niño (este hecho es negado por la rectora, pero ella no se encontraba ahí, sólo estaban el Página 3 de 11 coordinador académico y la docente directora de grupo), es decir, terminar forzosamente su año escolar, todo porque son un colegio privado y tienen la potestad de sacarlo. Es decir, el colegio prefiere “echarlo” a permitir que la mamá lo saque por voluntad propia cuando empieza a evidenciar situaciones que resultan perjudiciales para el desarrollo del niño. 1.12. En respuesta del 31 de agosto de 2021 dada por la Rectora María Marcela Martínez Castañeda, ella manifiesta que desconocía de los hechos aquí narrados “Frente a su comunicado este será tenido en cuenta no sin antes aclarar algunos aspectos que usted menciona los cuales como Rectora y Representante Legal de la institución desconocía totalmente, solo con su derecho de petición del cual usted me dirigió y le contesté que ya lo remití al área Jurídica de la institución.” (Negrilla fuera de texto). 1.13. El 31 de agosto de 2021 se da por terminado el contrato escolar, quedando José Agustín fuera de dicho colegio y a esperas de poder ser recibido en uno nuevo, llevando consigo los antecedentes marcados en el Liceo Bogotá y registrados en el observador (Prueba observador). 1.14. Dando cumplimiento a los compromisos adquiridos con el Liceo y en pro de mejorar la condición académica de mi hijo se ha procedido con el agendamiento de citas psicológicas en la fundación FUNDAMYF (Fundación mujer y familia) las cuales han tenido lugar el 31 de agosto, 9, 18 y 27 de septiembre y 20 de octubre de 2021. SEGUNDO. Durante los meses agosto y septiembre de 2021 presenté una serie de derechos de petición y queja formal ante el Liceo Bogotá - último este con copia a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN – en los cuales se solicitaba la siguiente información: 2.1. El día 26 de agosto de 2021 (Prueba respuesta del 31 de agosto 2021 pág. 2) presenté queja formal ante el Liceo Bogotá narrando los hechos ya mencionados en el acápite anterior con el fin de dar una solución a la situación que estaba viviendo mi hijo en dicha institución, hice solicitud formal de los siguientes documentos: 2.1.A. Terminación inmediata de la matrícula académica de mi hijo 2.1.B. La expedición de todas las facturas de pago (2020 y 2021) por conceptos de: 2.1.B.1. Matrículas 2.1.B.2. Pensiones 2.1.B.3. Almuerzos 2.1.B.4. Ruta 2.1.B.5. Uniformes 2.1.C. Copia del Observador 2.1.D. Copia integra de todos los boletines académicos 2.1.E. Copia integra del documento de matrícula condicional 2.1.F. Copia integra de todos los reportes y registros psicológicos que tenga mi hijo Página 4 de 11 2.1.G. Que se investigue el hecho motivo de la queja y se limpie el historial académico de mi hijo pues estos antecedentes pueden ocasionar que el niño, de tan solo 6 años pueda no ser recibido en otra institución de carácter privada viéndose vulnerados otros derechos inherentes del niño. 2.2. La queja mencionada también fue radicada ante el Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación el 30 de agosto de 2021 las cuales fueron aceptadas el 1 de septiembre de 2021 (Radicado No. 2021-EE-312543 y Radicado No. 2021- EE-312539) 2.3. El día 7 de septiembre de 2021 al recibir respuesta incompleta a la queja y derecho de petición del 31 de agosto de 2021 (Prueba respuesta) procedo a presentar un nuevo comunicado en el cual autorizo a mi padre Cesar Yesid Beltrán Agudelo para que se le entreguen los soportes pedidos en la queja y adicional a ello que se le entregue: 2.3.A. La lonchera que el niño dejó en las instalaciones del Liceo en su último día de asistencia. 2.3.B. La patineta de juguete que le fue decomisada por la docente Saida Orduña 2.3.C. Cualquier otro elemento personal o académico que permanezca en el locker de mi hijo 2.3.D. En dicha ocasión le niegan a mi padre la entrega de los elementos requeridos y le dicen que los documentos se entregarán por medio de la funcionaria jurídica del colegio. 2.4. El 7 de septiembre de 2021 y tras comunicación telefónica se me informa que debido a que mi hijo en algunos días no había ido al Liceo se me iba a realizar el reintegro total de los dineros adeudados por motivo de almuerzo, a lo cual, remití correo ese mismo día en el cual solicito que dichos dineros sean depositados en mi cuenta de ahorros y vuelvo nuevamente a solicitar los soportes no dados por el liceo en la contestación a los derechos de petición. 2.5. El 7 de septiembre mediante correo electrónico aclaré que los soportes que estaba solicitando en la queja y en los derechos de petición correspondían a todos los pagos adeudados desde el 2020 hasta el 2021 por conceptos de: 2.5.A. Matrículas 2.5.B. Pensiones 2.5.C. Almuerzos 2.5.D. Ruta 2.5.E. Uniformes”

B) PRETENSIONES DE LA ACCIÓN

El accionante en su escrito de tutela solicitó como pretensiones: “...PRIMERO: Tutelar el derecho fundamental de petición y debido proceso consagrados en los artículos 23 y 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991. SEGUNDO: Se ordene al Liceo Bogotá dar respuesta plena, de fondo y completa, haciendo entrega de todos los documentos solicitados en la queja del 26 de agosto de 2021 y 7 de septiembre de 2021 de conformidad con el cuadro presentado en el hecho quinto de la presente. TERCERO: Se ordene al Liceo Bogotá limpiar el historial de antecedentes académicos y le pida disculpas a mi hijo por la estigmatización presentada durante su permanencia en dicha institución. CUARTO: Se ordene al Liceo Bogotá devolver los

saldos pendientes por concepto de restaurante. QUINTO: Se ordene al Liceo Bogotá devolver los elementos materiales dejados por el niño en la institución, mismo solicitados en comunicación del 7 de septiembre de 2021. SÉPTIMO: Se ordene a la Secretaría de Educación y al Ministerio de Educación realizar la correspondiente investigación sobre el caso de mi hijo y no se limite solo a que el Liceo responda con la documentación solicitada”.

C) ADMISIÓN DE TUTELA

Mediante providencia del cinco (05) de noviembre de dos mil veintiuno (2021) se admitió la acción de tutela de la referencia una vez subsanada, contra el LICEO BOGOTÁ, Nit.900.326.953-9, y se ordenó notificar a la accionada para que en el término de dos (2) días, siguientes a su notificación realizaran las manifestaciones que consideraran pertinentes.

D) CONTESTACIÓN DEL ACCIONADO, LICEO BOGOTÁ Nit.900.326.953-9

Dentro del término de traslado el accionado LICEO BOGOTÁ, Nit.900.326.953-9, solicitó se declare improcedente la acción porque dio respuesta oportuna al quejoso.

II. DOCUMENTOS y ACTUACIONES QUE OBRAN

1. Escrito de tutela y anexos.
2. Auto del 2 de noviembre de 2021 que INADMITIÓ la acción.
3. Auto del 5 de noviembre que ADMITIÓ la acción.
4. Contestación y anexos del LICEO BOGOTÁ, Nit.900.326.953-9.
5. Informe secretarial de ingreso al Despacho.

III. CONSIDERACIONES

1. Este Despacho es competente para conocer de esta acción de tutela, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 37 del Decreto 2591 de 1.991, Decreto 1382 de 2.000, y demás disposiciones aplicables, por manera que se impone decidir sobre el amparo invocado, para lo cual ha de tenerse en cuenta que en términos del artículo 86 de la Constitución Política, desarrollado por el Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela es el procedimiento pertinente para reclamar la protección de los derechos constitucionales fundamentales cuando ellos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad, o de particulares en los eventos taxativamente regulados por la norma.
2. La acción de tutela ha dicho la Corte, no ha sido consagrada para provocar la iniciación de procesos alternativos o sustitutos de los ordinarios, o especiales, ni para modificar las reglas que fijan los diversos ámbitos de competencia de los jueces, ni para crear instancias adicionales a las existentes, ni para otorgar a los litigantes la opción de rescatar pleitos ya perdidos, sino que tiene el propósito claro y definido, estricto y específico que el propio artículo 86 de la Constitución indica, que no es otro diferente de brindar a la persona protección inmediata y subsidiaria para asegurarle el respeto efectivo de los derechos fundamentales que la carta reconoce.¹
3. Se ha decantado que la acción de tutela ostenta un carácter extraordinario y residual por cuanto su procedencia está sujeta a los límites mismos que impone la existencia de las demás competencias judiciales, es decir, la acción constitucional se caracteriza porque no es simultánea con las acciones ordinarias, tampoco paralela ni menos adicional o complementaria, acumulativa ni alternativa, como tampoco es instancia ni recurso alguno, de donde se infiere el deber de las personas agotar primeramente los escenarios jurídicos naturales que el legislador previó en cada caso.

¹ Corte Constitucional, Sentencia T- 001 de 1992. M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo.

4. Para el caso, la vulneración que alude el accionante, niño JOSÉ AGUSTÍN RODRÍGUEZ, R.C.No.1.013.148.196 a través de su madre LADY ANDREA BELTRÁN CÁRDENAS, se configura por cuanto, el convocado, LICEO BOGOTÁ, Nit.900.326.953-9, no ha dado respuesta a la petición elevada el pasado 26 de agosto de 2021. Para resolver el anterior problema jurídico, el Despacho en primer lugar, examinará los requisitos de procedibilidad de la acción interpuesta, de resultar procedente, examinará los aspectos fácticos, jurídicos y jurisprudenciales del derecho presuntamente vulnerado y valorará las pruebas allegadas, para decidir de fondo en el caso en concreto.
5. Así las cosas, es lo primero, verificar si en este caso concurren los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela para el derecho invocado, es decir, el de Petición: “...(i) Legitimación por activa. Puede ser usada por todas las personas cuyos derechos fundamentales se encuentren vulnerados o amenazados, por sí misma o por quien actúe a su nombre². (ii) Legitimación por pasiva. El amparo procede contra las acciones u omisiones de las autoridades públicas y de particulares cuando, entre otras, exista una relación de subordinación como sucede entre el trabajador y su empleador³. (iii) Inmediatez. No puede transcurrir un tiempo excesivo, irrazonable o injustificado entre la actuación u omisión y el uso del amparo⁴. (iv) Subsidiariedad. La acción de tutela resulta procedente cuando no existen otros mecanismos de defensa judicial disponibles, cuando los mecanismos disponibles no resultan eficaces para el caso concreto o cuando aun siéndolo, se requiere evitar la consumación de un perjuicio irremediable y se usa como mecanismo transitorio⁵”.
6. Con el precedente jurisprudencial que antecede y previa revisión a las pruebas adosadas, estima esta Jueza Constitucional que para el caso del niño JOSÉ AGUSTÍN RODRÍGUEZ, R.C.No.1.013.148.196 a través de su madre LADY ANDREA BELTRÁN CÁRDENAS; *i)* La accionante se encuentran legitimada por activa porque acudió en representación de sus propios intereses; *ii)* La presunta vulneración al derecho fundamental de petición, se denuncia como omisión del convocado, LICEO BOGOTÁ, Nit.900.326.953-9, persona jurídica que al parecer tiene la información que demanda el quejoso, con lo cual de conformidad con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 de la Ley 1755 de 2015, está legitimada como parte pasiva; *iii)* Del 27 de agosto de 2020 momento en el que el accionante refiere su primer evento de salud al 2 de septiembre de 2021, fecha en la cual radicó esta acción, no ha transcurrido tiempo extenso que se considere irrazonable, y *iv)* El accionante agotó la solicitud ante la accionada, sin que al parecer se diera respuesta a su pedido, siendo entonces la tutela el mecanismo idóneo para la protección a prerrogativa constitucional, pues de ello pende saber si se encuentra datos negativos del el historial de crédito de los accionantes y de ser así se cancele la anotación negativa.
7. Lo anterior porque en cuanto al requisito de subsidiariedad, “... La Corte Constitucional ha sostenido que conformidad con el inciso 3º del artículo 86 superior y el numeral 1º del artículo 6 del Decreto Estatutario 2591 de 1991 la acción de tutela es una herramienta de naturaleza residual y subsidiaria; de manera que, por regla general, solo procede cuando: *i)* el afectado no dispone de otro medio de defensa judicial, *ii)* pese a su concurrencia este no es eficaz o idóneo para lograr la protección de los derechos fundamentales, o *iii)* la acción se erige de manera transitoria para prevenir un perjuicio irremediable”.⁶ congruente es concluir, que, en el caso del niño JOSÉ AGUSTÍN RODRÍGUEZ, R.C.No.1.013.148.196 a través de su madre

² Ver artículo 86 de la Constitución Política y artículo 10 del Decreto 2591 de 1991.

³ Ver artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, en desarrollo del inciso 5 del artículo 86 de la Constitución Política y las Sentencias T-231 de 2010. M.P. Rodrigo Escobar Gil; T-516 de 2011. M.P. Nilson Pinilla Pinilla; T-323 de 2016. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-483 de 2016. M.P. Alberto Rojas Ríos; T-524 de 2016. M.P. Alberto Rojas Ríos; y T-502 de 2017. M.P. Alberto Rojas Ríos.

⁴ En la sentencia T-503 de 2015. M.P. María Victoria Calle Correa, la Corte Constitucional referenció las siguientes sentencias que pueden consultarse sobre este aspecto: “En este sentido, pueden consultarse las sentencias T-526 de 2005 (MP Jaime Córdoba Triviño), T-016 de 2006 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), T-692 de 2006 (MP Jaime Córdoba Triviño), T-905 de 2006 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), T-1084 de 2006 (MP Álvaro Tafur Galvis), T-1009 de 2006 (MP Clara Inés Vargas Hernández), T-792 de 2007 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra), T-825 de 2007 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), T-243 de 2008 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), T-594 de 2008 (MP Jaime Córdoba Triviño), T-189 de 2009 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), T-299 de 2009 (MP Mauricio González Cuervo), T-265 de 2009 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), T-691 de 2009 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), T-883 de 2009 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-328 de 2010 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), entre muchas otras”.

⁵ La Corte ha definido que un recurso de defensa judicial es idóneo cuando es adecuado para proteger el derecho fundamental amenazado y es eficaz cuando esta protección es además oportuna, para lo cual deben examinarse tres elementos: *i)* si la utilización del medio de defensa judicial ordinario puede ofrecer la misma protección que se lograría con la acción de tutela; *ii)* si existen circunstancias que justifiquen que el interesado no haya promovido los mecanismos ordinarios disponibles; y *iii)* si el accionante es un sujeto de especial protección constitucional. Ver las Sentencias T-016 de 2015. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez; T-347 de 2016. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez; T-040 de 2016. M.P. Alejandro Linares Cantillo; y T-502 de 2017. M.P. Alberto Rojas Ríos, entre otras.

⁶ Sentencia T-080 de 2018. A su vez, el perjuicio irremediable ha sido definido bajo ciertos supuestos rigurosos de inminencia, gravedad, urgencia e mpostergabilidad.

LADY ANDREA BELTRÁN CÁRDENAS, se configura la primera de las hipótesis jurisprudenciales, al no contar con otro medio de defensa, por manera que se satisface el requisito de subsidiaridad y la tutela resulta como la herramienta eficaz para adoptar las acciones que permitan conjurar la afectación a los derechos en caso de que se advierta su amenaza y/o vulneración.

8. Para acometer el estudio de fondo de la causa así delimitada por las partes, en primer lugar, se precisa que conforme a lo dispuesto en el artículo 23 de la Constitución Política, toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener de las mismas una pronta resolución, sino que además, la jurisprudencia constitucional ha sido reiterativa en sostener que el alcance del derecho de petición no se agota con la posibilidad de presentar solicitudes respetuosas a la administración, sino que comprende la oportunidad de formularlas, en ciertas ocasiones, ante particulares y obtener de éstos una respuesta que solucione de fondo y en forma oportuna la solicitud elevada.
9. En segundo lugar, cabe traer a colación que la Corte Constitucional de antaño ha precisado los elementos constitutivos del derecho fundamental de petición, así: “a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión. “b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido; “c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. **Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado** 3. ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición. “d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita... “g) En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que tiene la administración para resolver las peticiones formuladas, por regla general, se acude al artículo 6º del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días para resolver. De no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud. Cabe anotar que la Corte Constitucional ha confirmado las decisiones de los jueces de instancia que ordenan responder dentro del término de 15 días, en caso de no hacerlo, la respuesta será ordenada por el juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes. “h) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la obligación de resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto. El silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de petición. “i) El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa, por ser ésta una expresión más del derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta. Sentencias T-294 de 1997 y T-457 de 1994...”⁷
10. De otra parte, tal como lo reseña el quejoso, el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 5º del Decreto 491 de 2020, señala: “...**Ampliación de términos para atender las peticiones.** Para las peticiones que se encuentren en curso o que se radiquen durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria, se ampliarán los términos señalados en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, así: Salvo norma especial toda petición deberá resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones: (i) Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los veinte (20) días siguientes a su recepción. (ii) Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta y cinco (35) días siguientes a su recepción Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en el presente artículo expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto en este artículo. En los demás aspectos se aplicará lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011. **PARÁGRAFO.** La presente disposición no aplica a las peticiones relativas a la efectividad de otros derechos fundamentales...”.

⁷Corte Constitucional, Sentencia T-1160 A de 2001

11. Con los presupuestos expuestos, de cara a los hechos, se reseña lo señalado por el convocado, LICEO BOGOTÁ, Nit.900.326.953-9 quien refiere que: “Para el caso en concreto la institución cumplió con los elementos del núcleo esencial del derecho de petición, ya que la respuesta se dio dentro del término legal como se expresa por la accionante y se demuestra en los anexos, toda vez que ella instaura su petición el día 26 de agosto del año en curso y se dio respuesta el 8 de septiembre del mismo año es decir dentro de los 15 días; La respuesta de fondo se dio respuesta a cada uno de los puntos expresados por la peticionaria, bien sea porque se podía entregar algún documento o no, lo cual no puede confundir en establecer que el hecho de no eliminar las anotaciones del menor en el observador es sinónimo de una respuesta parcial, o el no allegar determinados soportes, ya que existe documentación que no es dominio de la institución; Notificación de la respuesta, la cual se realizó en debida forma enviada al correo electrónico definido en la misma petición. Carencia actual del objeto: El objeto de la acción de tutela es la supuesta violación del derecho de petición. Para esto la corte constitucional en su sentencia T-262 de 2004 establece “la acción de tutela pierde eficacia e inmediatez y, por ende, su justificación constitucional” el efecto de la acción de tutela en la carencia del objeto. Lo anterior contemplando que se dio respuesta del derecho de petición cumpliendo lo reglado en la ley 1755 de 2015 y en el núcleo esencial de la petición por ende al no existir objeto, no es procedente la petición, así mismo el debido proceso no se ha violado ya que no se evidencia argumento alguno que acredite esto”.
12. En ese orden de ideas, revisada las pruebas adosadas por las partes, es claro para el Despacho advertir que del convocado, LICEO BOGOTÁ, Nit.900.326.953-9, acreditó de manera idónea haber dado respuesta a lo pedido en oportunidad según documentales que se adosan y conforme a las se advierte respuesta clara, y de fondo a lo peticionado por el accionante, de donde es posible colegir que para el caso se configura el evento de hecho superado, acerca del cual la Corte en reiterada jurisprudencia ha manifestado: “... si en el trámite de una determinada acción de tutela, sobrevienen hechos que demuestran que la vulneración a los derechos fundamentales ha cesado o se ha consumado en forma tal que sea imposible restablecer al solicitante en el goce efectivo de su derecho conculcado, la acción pierde eficacia y razón de ser, al extinguirse el objeto jurídico sobre el cual se pretendía, resultando inocuo cualquier decisión al respecto. Lo importante, entonces, para que se establezca la existencia de un hecho superado es que emerja un acto o suceso que conlleve el cese de la vulneración a los derechos fundamentales del actor; quiere significar lo anterior, que cualquier otra pretensión propuesta por el demandante, que tuviera que ver directamente con la zanjada conculcación de sus derechos fundamentales, no puede ya resolverse por la vía constitucional. En un principio, la Corte consideró que en aquellos procesos de tutela en los que se presentaba un hecho superado, dado que la situación u omisión acusada de vulnerar o amenazar un derecho fundamental había desaparecido, se debía declarar la improcedencia de tutela, puesto que la orden que podría impartir el juez de tutela caería en el vacío. En otras ocasiones, estimó pertinente confirmar los fallos de tutela, con base en el mismo argumento acerca de la carencia actual de objeto, o simplemente se abstuvo de pronunciarse de fondo. En la actualidad se acepta que en aquellos casos en los que se observe carencia de objeto de la acción de tutela y sea evidente que debía haber sido decidida en un sentido diferente, debe definir si confirma o revoca, con la anotación de que no se pronunciará de fondo y no impartirá órdenes para indicar un remedio judicial sobre el problema jurídico...”⁸ Lo anterior sin que la respuesta del convocado en el escenario de la acción constitucional deba ser positiva a las aspiraciones o expectativas del accionante, porque en modo alguno ello es lo que la garantía al derecho fundamental de petición implica.

IV. CONCLUSIÓN

Puestas de esta manera las cosas, sin mayor hesitación, concluye el Despacho que declarará la improcedencia de la presente acción por hecho superado, virtud a que el convocado, LICEO BOGOTÁ, Nit.900.326.953-9, acreditó haber dado respuesta a las peticiones del accionante y sin que se advierta vulneración a derecho constitucional alguno.

V. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Cuarenta y Cuatro Civil Municipal de Bogotá D.C., administrado justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, RESUELVE:

PRIMERO: **DECLARAR** la improcedencia de la acción de amparo solicitada por del niño JOSÉ AGUSTÍN RODRÍGUEZ, R.C.No.1.013.148.196 a través de su madre LADY

⁸ Corte Constitucional, Sentencia T-271 de 2011

ANDREA BELTRÁN CÁRDENAS, por HECHO SUPERADO, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente decisión.

SEGUNDO: **DENEGAR** las pretensiones del actor por las razones de precedencia.

TERCERO: **COMUNICAR** a las partes que contra esta decisión procede la impugnación, dentro de los tres (3) días, siguientes al de su notificación. (art.31 del Decreto 2591 de 1991).

CUARTO: **ORDENAR** que por secretaría se notifique la presente decisión a las partes involucradas por correo electrónico.

QUINTO: **ORDENAR** que por secretaría una vez surtidas las notificaciones de rigor, de no ser impugnada esta decisión, se remita el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión tal como lo indica el inciso final del artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,



LUZ STELLA AGRAY VARGAS
Jueza

Firmado Por:

Luz Stella Agray Vargas
Juez
Juzgado Municipal
Civil 044
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **3b7cb20dfcc6f50dfd01fcfd90293d6880c657519ec83406af91c25e76df4198**

Documento generado en 17/11/2021 09:02:19 PM

Valide este documento electrónico en la siguiente URL: <https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>